



Hacia una Nuevo Modelo de Gestión

» La administración pública en Colombia se ha quedado corta en la regulación y expedición de normatividad tributaria ambiental, que realmente incentive la creación y protección de empresas verdes y sus correspondientes productos y servicios.

Por Julián Camilo Cruz González

La Globalización ha generado corrientes de cambio en los modelos de producción y consumo, por esta razón la sociedad se encuentra en una etapa de intercambio de información que genera deberes y responsabilidades sin precedentes. Un ejemplo de ello son las grandes empresas que tienen el reto de aumentar su productividad incorporando variables de índole social, económico y ambiental, por lo que se puede hablar con seguridad de una nueva gestión corporativa humanizada.

Los gerentes cada vez son más conscientes de la necesidad de procurar bienestar y actuar responsable y éticamente no solo frente a sus asociados, sino ante sus trabajadores y la sociedad en general. De esa manera empieza a hacer eco el concepto de responsabilidad social empresarial como instrumento básico voluntario del modelo corporativo, el cual tuvo sus inicios a mediados del siglo XX, tomando fuerza a partir del llamado "Pacto Mundial" (Global Compact) de 1999, un instrumento de las Naciones Unidas que establece mecanismos de diálogo social entre los intereses empresariales y la sociedad civil, reconociendo la importancia del sector productivo en disminuir la brecha social imperante en las economías de libre mercado.

Así, la sociedad civil asume un papel activo en el cual demanda información del sector corporativo, y a través de diferentes modos organizativos como los "stakeholders" logra incidir en las decisiones que se adoptan, trayendo consigo impactos positivos en la sociedad y en el ambiente, que una vez asimilado por la clase empresarial, se torna en un valor agregado que es determinante a la hora de la elección por parte del consumidor, sea un producto o servicio.

El acceso a la información es ahora uno de los principales objetivos de las empresas que incorporan la responsabilidad social en cada uno de sus procesos, la sociedad mundial se encuentra en una etapa de conciencia social y ambiental, que empieza a demandar bienes y servicios amigables con el ambiente y la sociedad.

Las empresas verdes son pioneras en la transformación de los hábitos de consumo y post consumo, el acceso

a nuevas tecnologías permite hoy reutilizar muchos de los recursos que antes eran asimilados como desechos o mal llamada "basura" y así reincorporarlos al ciclo productivo, generando un impacto positivo frente al ambiente, el cual se traduce en una reducción de la demanda de nuevos recursos naturales, razón por la que deberían tener incentivos tributarios ambientales directos, dada su incidencia en la protección y conservación de ciertos ecosistemas.

En ese sentido, hay que manifestar con preocupación que la administración pública en Colombia se ha quedado corta en la regulación y expedición de normatividad tributaria ambiental, que realmente incentive la creación y protección de empresas verdes y sus correspondientes productos y servicios, ya que industrias que son ejemplo a nivel mundial por los procesos que desarrollan, no tienen hoy ningún reconocimiento económico directo o indirecto que estimule su permanencia o proyección en el mercado.

De manera enunciativa, se debe señalar cómo el sector de la construcción es vanguardista en la implementación de infraestructura sostenible, que se ve apadrinada por sistemas de certificación desarrollados por el Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos (US Green Building Council), denominado LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), el cual permite identificar edificaciones que cumplen con los más altos estándares de eficiencia energética, implementación de energías alternativas, uso y ahorro eficiente de agua, así como otros aspectos con incidencia ambiental y energética que logran consolidar proyectos ambientalmente sostenibles.

Por último, es importante recordar que existen normas ambientales desconocidas para la mayoría de empresas del país, que solo serán adoptadas en la medida en que se reconozca y asimile el concepto de responsabilidad social empresarial en su componente ambiental. ⑥

** Abogado, Universidad Externado de Colombia.
Especialista en Derecho Contractual, Universidad del Rosario.
Magister en Derecho de los Recursos Naturales, Universidad Externado de Colombia.*